



► UNIVERSIDAD

100 profesores de la UBU se plantan para exigir más fondos de investigación

A la Junta. Denuncian que solo ha subvencionado el 17% de los proyectos presentados y piden un cambio en los criterios de evaluación que reconozca trabajos de Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas

B.G.R. / BURGOS

Las voces que claman contra los recortes en materia de investigación se escuchan desde hace tiempo advirtiendo del freno (irrecuperable) que esto supone para el desarrollo de un país. Ahora, quienes están al frente de proyectos que año tras año, en el último han sido cerca de un centenar de investigadores de la Universidad de Burgos, se quedan sin financiación pública han decidido dar un paso más y unirse para exigir, en este caso a la Junta de Castilla y León, más fondos que les permitan continuar o iniciar el estudio en sus áreas de conocimiento, además de un cambio en la política de concesión de subvenciones.

Una batalla a la que se han sumado ya más de 550 investigadores de las cuatro universidades públicas de la comunidad, que han firmado en la plataforma de Internet Change.org una carta destinada a la Consejería de Educación en la que plantean estas reivindicaciones. Quienes se sienten más perjudicados por la situación son aquellos vinculados a las Humanidades, las Ciencias Sociales y Jurídicas, y la llamada investigación básica, aquella que atañe a todas las áreas del saber y que sirve para generar conocimiento pero que no tiene una salida directa al mercado en el plazo de unos años, al contrario que la aplicada, que, por el contrario es la que más ayudas del Gobierno regional está recibiendo.

«Desde hace años la Junta solo está apoyando los proyectos de investigación aplicada porque parece que lo que quiere es una especie de universidad al servicio de la empresa», explica la catedrática de la UBU, María Luisa Lobato, que forma parte de los tres portavoces de este movimiento crítico que a finales de enero plantearon

sus reivindicaciones al Gobierno regional, quien subraya que para llegar a ese punto tiene que haber antes otro tipo de investigación.

Lobato, junto con otros tres compañeros de las universidades de Valladolid y Salamanca, comenzaron a moverse en noviembre, precisamente cuando la Administración regional resolvió al convocatoria de ayudas correspondiente a 2014, en la que se quedaron fuera del programa el 80% de los proyectos presentados, 286 de 363. En el caso de la institución académica local tan solo recibieron apoyo 4 de los 19 trabajos presentados, un 17%, que al menos

500 docentes de las universidades públicas de la región respaldan el movimiento crítico

implican a 80 profesionales, puesto que cada grupo de trabajo está formado por entre 6 y 10 personas.

Los grupos afectados pertenecen a ámbitos como la ciencia y la biotecnología de los alimentos; ingeniería electromecánica; arqueología; química inorgánica; educación; historia, literatura; derecho; ciencias; patrimonio, y comunicación.

La resolución causó «mucho malestar» entre los profesores-investigadores, teniendo en cuenta que se viene repitiendo en los últimos tres años y que ha supuesto un recorte de los fondos regionales para este fin del 40%. «La Junta tiene muy poco presupuesto», explica Lobato en referencia a los 1,8 millones que se destinaron a este

fin el año pasado. Una situación que -agrega- está teniendo como consecuencias la «paralización» de muchos proyectos regionales, el «cierre» de laboratorios y el «abandono» de determinados campos de conocimiento.

A partir de ese momento, comenzaron los contactos entre los investigadores de la región, que se han sumado a las reivindicaciones a través de la plataforma de firmas en internet Change.org, con más de 550 adhesiones, la mayoría de docentes universitarios en todas sus categorías (ayudantes doctores, contratados doctores, profesores asociados, titulares y catedráticos), o directamente poniéndose en contacto con los cuatro promotores del movimiento. Tanto la profesora de Filología de la UBU como los catedráticos Jorge Cuéllar, de Salamanca y Mercedes Tamame, del CSIC (también de Salamanca) han recabado las opiniones y sugerencias de los afectados, elaborando un escrito que han enviado tanto al director general de Universidades, Ángel de los Ríos, como al consejero de Educación, Juan José Mateos.

«NO HABRÁ RELEVO». Una de sus principales demandas es, sin duda, el aumento de la financiación. El propio De los Ríos les anunció un incremento de los fondos hasta los 6 millones de euros, si bien ellos muestran recelo por cuanto creen que en ese montante se incluyen también las ayudas europeas. A esa reivindicación añaden el cambio de los criterios de evaluación de los proyectos de investigación básica, de Humanidades y Ciencias Sociales por cuanto consideran que «no se pueden exigir los mismos requisitos a un trabajo de derecho o patrimonio que a otro relacionado con el cáncer». De lo contrario, ex-



Humanidades (azul claro) y Derecho (rojo), entre los perjudicados. / A. RODRIGO

plica Lobato, que «digan claramente que solo van a apoyar proyectos de investigación aplicada», añade.

Y en tercer lugar, que ese cambio de valoración facilite la incorporación de jóvenes investigadores, que continuamente se quedan fuera de las convocatorias al no poder competir en méritos con los de más experiencia: «No habrá relevo si no se les tiene en cuenta», explica Lobato.

Por el momento, no han visto «voluntad» por parte de la Junta. No obstante, aseguran que no cesarán en sus exigencias y que seguirán en conversaciones con la Administración, a lo que añaden como «segunda batalla»- «dar a conocer a la opinión pública» su situación y que «los estudios relacionados con el patrimonio, el derecho y aquellos que se basan en ciencias teóricas no parece que tengan interés para la Junta».

